

Crisis política por deudas estatales

Enérgico, severo, duro, el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, le reclamaba públicamente al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, rendir cuentas sobre un préstamo de 2 mil millones de pesos obtenido por la entidad federativa colocando como garantía las participaciones federales. El manotazo en la mesa, sin embargo, contrasta con la pasividad frente a otro obtenido por su antecesor, César Duarte, éste de 6 mil millones de pesos a semanas de terminar su gobierno.

A quién le importa si éste recibió la silla con una deuda de 14 mil millones de pesos y la dejó con 41 mil millones, equivalente al doble del total de ministraciones del gobierno federal durante un año. A quién le importa si las entidades más endeudadas en relación con sus posibilidades de pago apuntan a gobernadores acusados de corrupción cuyos titulares están en la cárcel, prófugos o al menos en entredicho. Estamos hablando, además, de Chihuahua, de Nuevo León, Quintana Roo, Coahuila y Sonora.

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, acaba de colocar el dedo en el centro de la llaga: “La Federación es condescendiente y omisa y no exime pulcritud, transparencia y rendición de cuentas sobre el dinero público que entrega a las entidades federativas. El resultado es un gasto público desencadenado que no genera infraestructura adecuada ni provee a los ciudadanos de servicios públicos de calidad”.

El conflicto entre el gobierno de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda se originó por el congelamiento de una partida extraordinaria de ayuda frente al estrago financiero heredado. El cable se cortó cuando la entidad denunció un desvío de recursos estatales hacia el PRI. Aunque la nueva Ley de Disciplina Financiera prevé alertas tempranas de Hacienda sobre entidades que bordean el sobreendeudamiento, el pozo se tapó después del niño ahogado.

Más aún, el ordenamiento no tiene tentáculos para revisar los débitos que se ocultan en fideicomisos, como ocurrió en el gobierno de Rafael Moreno Valle en Puebla, al heredar deudas por 47 mil 131 millones de pesos, con la novedad de que se reportaron sólo 6 mil 608 millones. Durante el gobierno foxista, la Secretaría de Desarrollo Social intentó hurgar sobre las partidas ejercidas en el renglón durante el gobierno de José Murat en Oaxaca, topándose con una disposición al vapor del Congreso local que impedía la auscultación.

La paradoja del caso, frente a los reclamos de soberanía local, es que la Federación provee 90% de los ingresos en el promedio de las entidades federativas. Y aunque la ley determina que cuando se reparten partidas adicionales, es decir, no presupuestales, se debe destinar una parte para amortizar deuda. El problema es que éstas no siempre apuntan a las entidades con mayor deuda.

El año pasado, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda le entregó a las entidades federativas 29 mil 556 millones adicionales a sus participaciones, por más que imperó el criterio político. Así, el Estado de México se llevó la mayor rebanada del pastel con 8 mil 765 millones, seguida de Jalisco con 4 mil 444, por más que a la Ciudad de México le tocaron 5 mil 230. Las dos primeras entidades tienen gobiernos priistas.

¿Piso parejo? ¿Gobierno para todos sin distinción?

Balance general. En el insólito de la temporada, pese a haber sido declarada en quiebra, la empresa Oceanografía podría volver a operar. El milagro lo logró un convenio planteado a solicitud del presidente de la firma contratista de Pemex, Amado Yáñez, que recibió el visto bueno de 50.9% de los acreedores. Este los obliga a aceptar una “quita” de 96% de sus facturas pendientes. La deuda total de la firma acusada de fraude por Banamex alcanza 12 mil millones de pesos.

La empresa, de lograr Yáñez apoyo financiero, operaría con 15 de los 52 barcos con que llegó a ser contratista estelar de Pemex. De los 700 empleados de la firma con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, apenas le queda una docena, colocándose en la mesa alrededor de 600 demandas laborales. La paradoja del caso es que Banamex nunca logró acreditar ante el juez del Concurso Mercantil, Felipe Consuelo Soto, el fraude con operaciones de factoraje de que acusó a la firma. Según ello, se habían falsificado facturas de Pemex que, sin embargo, fueron cobradas.

COLUMNA DE ENRIQUE CAMPOS SUAREZ. Enero 17 del 2018
--

¿Cuánto tiempo compró el TLCAN?

La amenaza que tiene el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se llama Donald Trump, no hay más. No hay ninguna otra razón para terminar con un productivo acuerdo que durante 24 años ha dejado beneficios a sus socios. Y en la medida en que el amenazante presidente de Estados Unidos tenga algo con qué entretenerse, el acuerdo gana tiempo.

Hoy la economía estadounidense está en franco crecimiento, el empleo está totalmente recuperado tras la Gran Recesión, no hay inflación, aumenta el consumo y su reforma fiscal ha tenido en general una buena recepción entre los beneficiarios. Hay, pues, razones para que el presidente estadounidense se mantenga sereno.

Y debería abrirse la oportunidad de que escuche a las empresas de su propio país que le quieren convencer de la necesidad de mantener abiertos esos mercados, el de México y de Canadá, con la llave de un acuerdo de libre comercio. Pero se trata de un personaje del que hay dudas fundadas de su balance entre la razón y la emoción. Hay buenas razones para pensar que los frenos de personalidad que

cualquier persona debe tener para reflexionar antes de actuar están alterados en el caso del inquilino de la Casa Blanca.

Hasta hace unos días se esperaba que la próxima semana fuera el momento de juicio final del TLCAN. El gobierno canadiense hizo saber que estaban seguros del término del acuerdo como lo conocemos en un arranque del presidente de Estados Unidos justo antes del inicio de la ronda de negociaciones de Montreal. Esa crisis generada por el rumor sirvió para, aparentemente, comprar tiempo. El propio Donald Trump salió a regalar espacio electoral a México para alargar las negociaciones.

Sin embargo, ese tiempo que aparentemente ganó el TLCAN y que se aprecia en la relativa tranquilidad de los mercados, ahí está el tipo de cambio y sus ganancias de enero, puede acabarse en Suiza. La cumbre económica de Davos de este año, que inicia el próximo martes, tiene como estrella central a Donald Trump. Que no le quede ninguna duda de que los reflectores serán totalmente para él. Llegará con la euforia del primer aniversario y se meterá a la casa de los amantes de la globalización y es el escenario ideal para un lance histriónico. Es mucha tentación para alguien así.

Allá mismo en Davos se encontrarán los ministros de México, Canadá y Estados Unidos responsables de la negociación comercial y podrían al menos avanzar en el establecimiento de un nuevo calendario que permita hacer espacio para las elecciones mexicanas de julio.

Eso no es otra cosa que procrastinar, extender en el tiempo una negociación que supera la evidente necesidad de modernización del TLCAN y que más bien pende de estados de ánimo. Con el agravante de que tras las elecciones mexicanas podría ser una opción triunfadora quien puede mandar al diablo también a esta institución del libre comercio.

Ha pasado prácticamente un año desde que Donald Trump asumió la Presidencia de Estados Unidos y en materia del TLCAN estamos como al principio, con la espada en la cabeza. Ganar otros seis meses nos regala estabilidad cambiaria temporal, pero prolonga la incertidumbre para tomar muchas decisiones.
ecampos@economista.com.mx